



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA**

**SENTENCIA TC/0714/23**

**Referencia:** Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4

Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

**I. ANTECEDENTES**

**1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo y cuya solicitud de suspensión de ejecución se solicita**

Con ocasión del recurso de casación interpuesto por las Sras. Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) la Sentencia núm.0293/2020, objeto del presente recurso de revisión y de la presente solicitud de suspensión de ejecución, la cual contiene el siguiente dispositivo:

*PRIMERO: CASA la sentencia civil núm. 627-2015-00070 (C), de fecha 1 de julio de 2015, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones.*

*SEGUNDO: COMPENSA las costas.*

Esta decisión fue notificada el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) a los actuales recurrentes, Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, de conformidad con el Oficio núm. 01-25795, a requerimiento del secretario general de la Suprema Corte de Justicia.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia**

El recurso de revisión constitucional y la solicitud de suspensión que nos ocupan fueron interpuestos el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020) por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta vía la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, el veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020), el recurso de revisión y la solicitud de suspensión fueron notificados a las recurridas, Sras. Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre, de conformidad con el Acto núm. 794/2020, instrumentado por el ministerial Miguel Arturo Caraballo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, a requerimiento de los actuales recurrentes.

Así, el doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020), las recurridas presentaron su escrito de defensa a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, el expediente íntegro fue recibido el cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por este tribunal constitucional, en virtud de la remisión efectuada por el secretario general de la Suprema Corte de Justicia.

**3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional y cuya solicitud de suspensión de ejecución se solicita**

Para acoger el recurso de casación y casar la sentencia impugnada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia fundamentó su decisión, entre otros, en los siguientes motivos:

Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*3. En el desarrollo de sus medios de casación, reunidos para su conocimiento por estar estrechamente vinculados, la parte recurrente aduce que la corte incurrió en los vicios denunciados, pues inobservó las previsiones del artículo 69, numeral 4[,] de la Constitución dominicana, lo que deriva en la transgresión de su derecho de defensa. Esto así, según alega, pues[,] aun cuando indica en una parte de su decisión que ambos litigantes concluyeron al fondo del recurso, en otra parte establece que la entonces parte apelada no acudió a los debates no obstante citación legal. Además, establece la jurisdicción a qua que las hoy recurrentes no aportaron medios probatorios sobre el crédito reclamado, pero olvidó que[,] si realmente se produjo el defecto de dicha parte, los únicos documentos depositados debieron ser los que interesaban a los entonces recurrentes y, en todo caso, dicha corte debió asegurarse de que el documento del cual se daba copia en el acto introductivo de demanda en efecto existía y no podía ser desconocido.*

*6. Es preciso resaltar[] que el derecho de defensa, además de ser un derecho fundamental, al tenor de lo dispuesto por el artículo 69 numeral 4[,] de la Constitución, es una garantía procesal que permite a todo ciudadano cuyos intereses fueren afectados por una decisión judicial [...] intervenir a lo largo del proceso en el que se dicte dicho fallo, para realizar las alegaciones que considere oportunas y proponer los medios de defensa que entienda pertinentes, así como la facultad de contradecir los alegatos propuestos por la contraparte, con la finalidad de que se tomen en cuenta y que sean valoradas sus pretensiones.*

*7. En ese orden de ideas, ha sido juzgado que[,] ante la incomparecencia de una de las partes a un juicio, el tribunal apoderado está obligado a comprobar, aun oficiosamente, que su derecho de*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*defensa haya sido garantizado mediante una citación o notificación regular y, a falta de esta no puede estatuir válidamente. Además, ha sido criterio constante de esta sala que el solo hecho del defecto del intimado no libera al accionante o recurrente de la obligación de suministrar la prueba de sus alegaciones ni al juez de fallar conforme al derecho. Por consiguiente, corresponde al juez[,] para fundamentar su decisión, referirse a los argumentos, pretensiones y medios probatorios desplegados por las partes y establecer cuál de ellas probó los hechos alegados de magnitud a producir sea la reformatión o confirmación del fallo apelado.*

*8. En el caso, aun cuando ante la alzada fue solicitado el defecto de Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre, dicho órgano dio por establecido que ellas[,] como demandantes primigenias[,] no depositaron ninguna prueba en defensa de las alegaciones de los entonces apelantes, sin ponderar si en efecto había sido debidamente citada con la finalidad de darle la oportunidad de defenderse. Por el contrario, aporta la parte ahora recurrente una certificación en que la secretaria de dicho órgano indica que no existe depositado, acto de avenir y/o acto de notificación del auto de fijación No. 627-2015-00058, a la parte recurrida, en el recurso de apelación interpuesto por Félix A. Ramos Peralta y Fernán L. Ramos Peralta (...), cuestión que, como se alega, deja entrever la inconsistencia en lo relativo al cuidado del derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso que por ley le es conferida a las partes.*

*9. Además, a juicio de esta Corte de Casación[,] resulta fuera del ámbito legal el rechazo de la demanda primigenia fundamentado exclusivamente en la falta de pruebas aportadas por parte de la*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*entonces apelada, por cuanto la existencia de los medios probatorios dados por establecidos ante el tribunal a quo no puede ser pura y simplemente desconocida por la corte sin que el apelante deposite ningún elemento de prueba, con el fin de rebatir lo establecido en primer grado.*

*10. Todo lo anterior permite derivar que la sentencia impugnada adolece del vicio denunciado, por tanto, procede acoger el medio invocado.*

*11. De conformidad con el artículo 65, numeral tercero[,] de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual procede compensar las costas del proceso.*

**4. Argumentos de los recurrentes en revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitantes en suspensión de ejecución de sentencia**

Los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, en su condición de recurrentes, pretenden que la sentencia recurrida sea anulada y reenviado el expediente a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Para sustentar tales pretensiones, argumentan, en síntesis, lo siguiente:

*Es procedente la interposición del presente recurso y su subsiguiente declaratoria de ADMISIBILIDAD[] porque la decisión recurrida: 1.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Goza de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, 2. El recurrente se ve en la necesidad, por primera vez, de invocar la violación a garantías, principios y derechos constitucionales y fundamentales, pues había obtenido ganancia de causa ante [la] Corte a-qua y es la Primera Sala de la SCJ la que ha producido una variación de dicha sentencia en su perjuicio; y 3. La violación a los derechos fundamental es imputable de modo inmediato y directo a las acciones y omisiones del órgano jurisdiccional que se invocan en la presente instancia a modo de postulados, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso; en este caso la violación a la Constitución y las leyes, por inobservancia de los derechos de defensa, a un juez imparcial y el [d]ebido [p]roceso de [l]ey, y los principios de separación de funciones y legalidad[,], además de que la decisión cuya revisión se pretende es ilógica y contradictoria con otras decisiones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y este propio Tribunal Constitucional, lo que también implica una vulneración al principio de igualdad y a los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en que incurre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia [...]*

*En el presente caso estamos frente a una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que manifiestamente conculca derechos fundamentales, garantías y principios constitucionales, la cual es susceptible de revisión constitucional conforme lo dispuesto por los numerales 2) y 3) letra c) del artículo 53 de la Ley 137-11. [...]*

*Honorables magistrados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia[] incurre en falta y contradicción manifiesta en la motivación de la decisión impugnada en revisión constitucional. [...]*





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*La sentencia impugnada afirma en su numeral cuatro de la pág. 5 que: 1) “la parte recurrida produjo su memorial de defensa” y 2) que no notificó el citado memorial ni constitución de abogado; por lo que dicha Sala “pronunció el defecto en su contra mediante resolución núm. 2016-3428, de fecha 19 de septiembre de 2016”.*

*Estas consideraciones[] son las que permitieron a la Primera Sala de la SCJ[] deshacerse del memorial de defensa depositado por los señores F[É]LIX A. RAMOS PERALTA y FERNAN L. RAMOS PERALTA, de modo que dicho memorial, acomodaticiamente —por razones que quedarán develadas más adelante—[,], no fue ponderado como medio de defensa de estos últimos.*

*En primer lugar, el acto [n]úm.2122/2015 [...] no s[o]lo que no es cierto que los recurrentes en revisión, F[É]LIX A. RAMOS PERALTA y FERNAN L. RAMOS PERALTA, no constituyeran abogado ni notificaran memorial de defensa[,], sino[] la vileza procesal en que incurrir [...] al solicitar un defecto en contra de las partes recurridas[] cuando los mismos fueron notificados del memorial de defensa y la constitución de abogado que produjeron F[É]LIX A. RAMOS PERALTA y FERNAN L. RAMOS PERALTA[] en el plazo dispuesto por la Ley de Casación.*

*Fijaos bien, honorables jueces[,], que en los términos del artículo 9 de la Ley de Casación, se considerará en defecto al recurrido si este “... no constituye abogado o no produce y notifica su memorial de defensa”. Este artículo no estima en defecto al recurrido que no deposita la constitución de abogado ni la notificación del memorial de*





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*defensa[,] por lo que la sentencia impugnada en revisión deja virtualmente expuesta la violación [al] principio de legalidad, estableciendo sanciones no previstas expresamente por el legislador, [...] que patrocina, en lo sucesivo, que se considere en defecto a todos aquellos[,] como F[É]LIX A. RAMOS PERALTA y FERNAN L. RAMOS PERLATA, que cumplen con notificar la constitución de abogado y el depósito del memorial de defensa en la Secretaría de la SCJ, pero que no depositan, oportunamente, dicha notificación vía Secretaría.*

*El artículo 9 de la Ley de Casación especifica muy bien los supuestos en los que el recurrido debe ser considerado en defecto. Si el legislador hubiese pretendido que el no depósito de la notificación de la constitución de abogado y memorial de defensa[] fuera causa para considerar en defecto al recurrido, lo hubiese dispuesto de manera expresa en dicho artículo.*

*Conforme el citado texto[,] s[o]lo se puede considerar en defecto a: 1) quien no ha constituido abogado, debido a que en casación es obligatorio el ministerio de abogado; y 2) quien no ha producido y presentado, a través de abogado constituido, un memorial de defensa. [...]*

*En segundo lugar, si bien el artículo 8 de la Ley de Casación[] dispone que “en los ocho días que sigan la notificación del memorial de defensa, el recurrido depositará en secretaría el original de esa notificación junto con el original del referido memorial (...)”[,], esto no impide que el recurrente cumpla con dicho depósito, como parte interesada.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Por lo tanto, queda evidenciada la falta e ilogicidad en la motivación de la sentencia, lo cual va de la mano con la vulneración por parte de la Primera Sala de la SCJ de los principios de legalidad y de separación de poderes, al basar el derecho pronunciado en una causa no prevista expresamente por el legislador en el artículo 9 de la Ley de Casación.*

*Esto sirvió de exclusiva para que la Primera Sala de la SCJ omitiera estatuir sobre dos medios de inadmisión planteados en el memorial de defensa [...] y que ponderara los medios de defensa al fondo que, de haber sido tomados en cuenta, otra hubiese sido la suerte del caso en casación.*

*Por último, la falta de motivación queda también evidenciada en el hecho de que la Primera Sala de la SCJ no examina de oficio la caducidad del recurso de casación interpuesto, cuando la propia parte recurrente[] depositó como anexo a su memorial de casación el “original del acto No.1772/2015, de fecha 25/7/2015, de notificación de sentencia ...” y a pesar de que [el] artículo 47 de la Ley 834 establece que “los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías de recurso”.*

*En consecuencia, a[u]n habiendo la Primera Sala de la SCJ considerado en defecto a la parte recurrida —que había planteado la inadmisibilidad por no haberse interpuesto el recurso de casación en el plazo de treinta (30) días dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Casación—[, ] debió examinar dicho medio de oficio[] pues la sentencia impugnada en casación fue notificada el 25 de julio de 2015 y el recurso*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*fue interpuesto el 26 de agosto de 2015, es decir, treinta un días (31) después.*

*Si la Primera Sala de la SCJ se hubiese tomado en serio la tarea de invocar de oficio los medios de inadmisión que se refieren a los plazos para interponer recurso de casación, como indica el artículo 47 de la Ley 834 de 1978, otra hubiese sido la suerte que hubiesen corrido los recurrentes en revisión [...]*

*En consecuencia, debe este honorable Tribunal Constitucional de la República Dominicana[] anular la sentencia recurrida en revisión[] por no contener una motivación integral[] en violación al derecho de defensa, al debido proceso de ley y a la seguridad jurídica que deriva de la autoridad de la cosa juzgada de las decisiones no recurridas oportunamente. [...]*

*Honorables magistrados, para fundamentar su fallo, la Primera Sala de la SCJ, en el numeral 8 de la pág. 7 de la sentencia impugnada en revisión, da por establecido que la Corte a-qua no ponderó si ROSA ELENA DAUHJARE DAUHAJRE DAUHAJRE y ROSA DAUHAJRE DAUHAJRE habían sido “debidamente citadas con la finalidad de darle la oportunidad de defenderse” y que[,] “por el contrario, aporta la parte ahora recurrente una certificación en que la secretaria de dicho órgano indica que no existe depositado, acto de avenir y/o auto de notificación de auto de fijación No.627-2015-00058, a la parte recurrida, en el recurso de apelación interpuesto por Félix A. Ramos Peralta y Femán L. Ramos Peralta (...)” [...]*

*El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define emplazar como “dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo”.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Conforme el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil “el acto de apelación contendrá emplazamiento en los términos de la ley a la persona intimada, y deberá notificarse a dicha persona o en su domicilio ...”*

*En virtud del artículo 72 del CPC “el término ordinario de los emplazamientos, para aquellos que estén domiciliados en la República, es el de la octava”. También, el artículo 59 del CPC dispone que “en materia personal, el demandado será emplazo ante el tribunal de su domicilio; si no tuviere domicilio ante el tribunal de su residencia; si hubiere muchos demandados, por ante [el] tribunal del domicilio de uno de ellos, a opción del demandante”.*

*El término citar, aunque alguna que otra doctrina y la jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJ se han encargado de confundirlo erróneamente con el de emplazar, es utilizado en el CPC en el sentido dado por la RAE, es decir, como “avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún asunto” [...]*

*Es por esta razón que[,] en materia de los referimientos, comercial o en la materia civil competencia de los Juzgados de Paz[,] es correcto utilizar el término “citación”[,] mientras que en la materia civil ordinaria el término a emplear es “emplazamiento”.*

*A los fines de lo que pretendemos demostrar, que es ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, se hace imprescindible traer a colación los conceptos de “constitución de abogado” y “avenir”.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*De conformidad con el artículo 75 del CPC, la “constitución de abogado” es una notificación que hace el abogado del demandado al abogado de la parte demandante, en “el término del emplazamiento”, es decir, en el plazo de la octava, indicando que ha sido constituido por el demandado como su abogado, así como indicando el domicilio de elección.*

*La jurisprudencia se ha encargado de brindar una definición de “avenir”, expresando que es “el acto mediante el cual, conforme a la Ley 362 de 1932, debe un abogado llamar al colega constituido por contraparte a discutir un asunto en los tribunales”.*

*Por lo tanto, las nociones EMPLAZAMIENTO, CONSTITUCIÓN DE ABOGADO y AVENIR[] se encuentran estrechamente vinculadas, siendo el avenir[] el presupuesto de la constitución de abogado y esta última la premisa del emplazamiento. No obstante, por el empleo que le ha dado el legislador en el CPC, el término CITACIÓN es antagónico con los conceptos CONSTITUCIÓN DE ABOGADO y AVENIR.*

*Entonces, partiendo de los conceptos anteriores y, no estando en discusión que en el procedimiento civil ordinario que se conoce en las cortes de apelación, producto de la interposición de un recurso de apelación en esa materia, que conlleva, de conformidad con el artículo 462 del CPC, emplazamiento en la octava, nos preguntamos: ¿Cómo pudo la Primera Sala de la SCJ distraerse en la verificación absurda de si se citó a fecha fija a la parte recurrida para conocer del recurso de apelación, cuando en esta materia no se cita, sino que se emplaza? Definitivamente, la Primera Sala de la SCJ se embarca en la búsqueda de un “elefante rosa”, como sería un avenir, sin el presupuesto de la constitución de abogado.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Cuesta creer[,], además[,], que la Primera Sala de la SCJ haya relegado la jurisprudencia pacífica de la propia Sala que establece que “el avenir debe ser notificado a los abogados de la parte, no a la parte misma” (SCJ, 1<sup>a</sup> Sala, 24 de octubre de 2012, núm. 81, B.J. 1223). Esto se traduce, aplicado al caso de la especie, en que estando debidamente “emplazadas” las recurridas en apelación, ROSA ELENA DAUHAJRE DAUHAJRE y ROSA DAUHAJRE DAUHAJRE, mediante la notificación del recurso y no habiendo estas constituido abogado en el plazo del emplazamiento, ni en ningún otro momento[,], no estaba obligada la parte recurrente a “citar” a las recurridas a fecha fija ni mucho menos a darles “avenir”, como sugiere la Primera Sala de la SCJ en su fallo. [...]*

*Por lo tanto, ha quedado evidenciado que la motivación que da la Primera Sala de la SCJ en su fallo, más allá de insólita, resulta ilógica y desatinada, pues no soporta el más tenue de los exámenes jurídicos para determinar la consistencia de sus motivos[,], por lo que es incuestionable que[,], ante la motivación integral que exige la Constitución a las decisiones de los jueces para que se consideren legítimas, no le quedará otra alternativa a este Tribunal Constitucional que anular el fallo objeto de recurso de revisión constitucional. [...]*

*Honorables magistrados, otra de las osadías de la Primera Sala de la SCJ en su fallo es el de relativizar el efecto devolutivo del recurso de apelación civil y crear una carga probatoria con una dinámica distinta a la establecida en el artículo 1315 del Código Civil Dominicano y consolidada por la jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia y la Corte de Casación [f]rancesa[,], colisionando así con los precedentes*





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*de este Tribunal Constitucional[] en cuanto a la seguridad jurídica y la motivación que deben contener los giros jurisprudenciales.*

*En ese sentido, se lanza la Primera Sala de la SCJ a establecer en el fallo objeto de revisión[] un criterio inédito al establecer que “resulta fuera del ámbito legal el rechazo de la demanda primigenia fundamentado exclusivamente en la falta de pruebas aportadas por la parte de la entonces apelada, por cuanto la existencia de los medios probatorios dados por establecidos ante el tribunal a quo no puede ser pura y simplemente desconocida por la corte sin que el apelante deposite ningún elemento de prueba, con el fin de rebatir lo establecido en primer grado”. [...]*

*Al respecto, viene bien para aclarar, preguntarse: ¿Existe una obligación del acreedor de probar la existencia de su acreencia y el particular interés en la instancia; qué otra cosa debió ponderar la Corte de Apelación de Puerto Plata para rechazar la demanda, que no sea la falta de prueba? Los honorables jueces de esta Alta Corte conocen muy bien que esta causa exclusiva —la falta de pruebas— es motivo suficiente para que los jueces rechacen cualquier demanda.*

*De todos modos, la Corte de Apelación de Puerto Plata[] no s[o]lo se fundamentó en la falta de pruebas de la demandante, quien no depositó el original del contrato en el que fundamenta sus pretensiones, sino en la falta de interés en la instancia y en defenderse de la parte recurrida (demandante). Vale la pena hacer un paréntesis en este espacio y traer a colación una cuestión que nos permitirá demostrar también la contradicción de la Primera Sala SCJ en su “lógica”.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Resulta[] que el mismo Tribunal que sostiene que el hecho de que los recurrentes F[É]LIX A. RAMOS PERALTA y FERNAN L. RAMOS PERALTA[] hayan sido considerados en defecto en casación y estima que esto “hace que su memorial no sea ponderado” es el que recrimina a la Corte a-qua por desconocer elementos de prueba depositados en la primera instancia por una parte considerada también en defecto.*

*Es decir, para la Primera Sala de la SCJ[] no se puede valorar el memorial de defensa de un recurrido en defecto —que es un medio de defensa—, pero sí la prueba de un recurrido (demandado) en apelación considerado en defecto. Lo antes dicho[] no s[o]lo es una manifiesta incongruencia en la motivación de la sentencia, sino que constituye una aplicación desigual y desproporcionada de los criterios jurídicos. [...]*

*En efecto, estando regida la materia civil por un principio dispositivo y, producto del efecto devolutivo del recurso de apelación al mismo estado en que se encontraba el proceso en la primera instancia, lo cual requiere un reexamen del caso; mal podía la Corte a-qua, sin un interés expreso de la parte demandante (recurrida) en la instancia, condenar a la parte demandada (recurrente). Sin conclusiones leídas por la parte demandante (recurrida) solicitando la condena del demandado (recurrente) no podía la Corte de Apelación de Puerto Plata[] confirmar una sentencia condenatoria dictada en la primera instancia, conforme el principio dispositivo que rige la materia civil.*

*Se trata de entender y traducir lo antes dicho como una proposición tan simple y lógica como que: sin demandante no hay demanda y sin demanda no puede haber condena.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*Durante muchos años, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido los criterios de que[,] “en virtud del efecto devolutivo de la apelación, los aspectos debatidos en primer grado pasan íntegramente a la tribunal de alzada para ser conocidos nuevamente en toda su extensión (...)” (SCJ, 1ª Cám., 5 de julio de 2006, núm. 2, B.J. 1148, pp. 87-100) y que[,] “en materia civil, el demandante tiene la obligación —no la falcultad [sic]— de aportar los documentos necesarios que justifiquen los hechos que invoca” (SCJ, 1ª Sala, 15 de mayo de 2013, núm. 142, B.J. 1230; 16 de febrero de 2011, núm. 26, B.J. 1203; 1ª Cám., 26 de marzo de 2008, núm. 17, B.J. 1158, pp. 235-243).*

*No obstante, dichos precedentes fueron soslayados por la Primera Sala de la SCJ, constituyéndose el fallo impugnado en revisión, reiteramos, en un nuevo precedente, pero que no satisface la motivación suficiente que exige este tribunal para producir un giro jurisprudencia o cambio de criterio y que, por lo tanto, conculca los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución de la República. [...]*

*En fin, este Tribunal Constitucional se encuentra frente a un caso de alto interés constitucional. De la decisión de esta [...] Alta Corte dependerá la paz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a la extensión de los conceptos básicos: ACTO DE EMPLAZAMIENTO, ACTO DE CITACI[Ó]N, ACTO RECORDATORIO o AVENIR, DEFECTO, INTER[É]S y DESISTIMIENTO[,], así como en cuanto al efecto devolutivo del recurso de apelación y el alcance del principio dispositivo y el fardo de la prueba en materia civil. También de esta decisión dependerá la tranquilidad (previsibilidad) de todos aquellos recurrentes*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*(demandados) que acuden a las Cortes de Apelación y que, ante la incomparecencia y falta de constitución de abogado, solicitan en audiencia que sea pronunciado el defecto y el rechazo de la demanda por falta de pruebas, ante el desinterés tácito en la instancia.*

*Definitivamente, la sentencia recurrida pone en tela de juicio la igualdad y seguridad jurídica en la República Dominicana, pues no puede ser que una Corte de Apelación condene a un demandado sin que medie el interés de la parte demandante en la instancia y que se le apertura un recurso de casación a una parte que no compareció en apelación.*

*En consecuencia, procede acoger la presente solicitud de revisión constitucional y, en efecto, anular la sentencia [...] por carecer de motivos lógicos[] en violación a los derechos fundamentales al debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva[,] además de vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa y a un juez imparcial, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica.*

**5. Argumentos de las recurridas en revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia**

En cambio, las Sras. Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre, en su calidad de recurridas, nos solicitan que el recurso de revisión sea inadmitido. Para sustentar tales pretensiones, alegan, en síntesis, lo siguiente:

*Vistas las previsiones establecidas por el artículo 53[.3, 1]etra b, de la [L]ey 137-11, [...] se puede[,] sin lugar a ninguna duda [...], establecer que los referidos recurso[] de revisión y solicitud de suspensión de*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*ejecución de sentencia[] devienen en INADMISIBLES, [t]oda vez que fueron interpuestos dichos recursos[] sin haber agotado las vías jurisdicciones correspondientes. [...]*

*El referido recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia[] no se ajusta a lo establecido en el art[í]culo 53[.3,] letra b, de la [L]ey 137-11, [...] en virtud de que la parte recurrente[] no agot[ó] todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente;*

*1) toda vez que debió recurrir en revisión por ante el tribunal de[] alzada que dict[ó] la decisión recurrida y no lo hizo.*

*2) La decisión recurrida no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, toda vez que la sentencia [...] fue casada con envió[] a la corte de apelación de La Vega.*

*El recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia [...] deviene también en INADMISIBLE, toda vez que[] el referido recurso fue notificado violentando el plazo de ley establecido en el art[í]culo 54[, ] numeral 2[, ] de la [L]ey 137-11, [...] toda vez que el recurso de revisión fue depositado por ante la [S]ecretar[í]a [G]eneral de la [S]uprema [C]orte de [J]usticia[] en fecha [d]ieciocho (18) días del mes de septiembre del año 2020, y fue notificado mediante acto No.794/2020, de fecha veintisiete (27) de octubre del año 2020, en franca violación a lo establecido en el art[í]culo 54 numeral 2 [...]*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**6. Pruebas documentales**

Las pruebas documentales más relevantes que figuran en el expediente son las siguientes:

1. Oficio núm. 01-25795, recibido el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020), mediante el cual el secretario general de la Suprema Corte de Justicia notifica a los recurrentes, Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, la sentencia objeto del recurso de revisión y de la solicitud de suspensión de sentencia que nos ocupan.
2. Escrito contentivo del recurso de revisión que nos ocupa, presentado el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020) por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.
3. Escrito contentivo de la solicitud de suspensión de sentencia que nos ocupa, presentado el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020) por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.
4. Acto núm. 794/2020, instrumentado el veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020) por el ministerial Miguel Arturo Caraballo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
5. Escrito de defensa, presentado el doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) por las Sras. Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre,





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

actuales recurridas, a través de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.

**II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS**  
**DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**7. Fusión de expedientes**

Si bien la fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, los tribunales de derecho común la ordenan en la práctica cuando entre demandas o recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar el principio de economía procesal.

En este sentido, conviene destacar que, mediante la Sentencia TC/0094/12, este Tribunal Constitucional ordenó la fusión de dos expedientes relativos a acciones en inconstitucionalidad, en el entendido de que

*la fusión de expedientes es una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia.*

La fusión de expedientes en los casos pertinentes, como en la especie, es procedente en la justicia constitucional, en razón de que es coherente con el principio rector de celeridad previsto en el artículo 7.2 de la Ley núm. 137-11, que establece que *los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*constitucionales y legalmente previstos y sin demora innecesaria.* Esto también en virtud del principio de efectividad, consagrado en el artículo 7.4 de la referida ley:

*Todo juez o tribunal debe aplicar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.*

Considerando que tanto los expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019 envuelven a las mismas partes y se refieren a la misma decisión jurisdiccional, esto es, la Sentencia núm. 0293/2020, emitida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, este Tribunal Constitucional fusiona ambos expedientes para ser decididos a través de esta misma sentencia.

## **8. Síntesis del conflicto**

De conformidad con la documentación aportada y los hechos alegados por las partes, el conflicto tiene su origen con una demanda en cobro de pesos presentada por las Sras. Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre en contra de los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta. Esta demanda fue conocida y acogida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata. Condenó a los demandados al pago de la suma reclamada.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Insatisfechos con la sentencia de primer grado, los Sres. Ramos Peralta recurrieron en apelación. la Corte de Apelación de Puerto Plata acogió el recurso, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda presentada por las Sras. Dauhajre.

Inconformes con la sentencia de apelación, las Sras. Dauhajre recurrieron en casación. Al conocer el referido recurso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que, en contra de las recurrentes, se había violado el derecho de defensa. Consecuentemente, acogió el recurso de casación, casó la sentencia de apelación y envió el asunto ante la Corte de Apelación de La Vega. En desacuerdo con esa sentencia, los Sres. Ramos Peralta han acudido ante este tribunal constitucional a través del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Nos solicitan que la decisión impugnada sea anulada.

## **9. Competencia**

De conformidad con los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.

## **10. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional**

Este tribunal estima que el recurso de revisión que nos ocupa deviene en inadmisibile por haberse intentado en contra de una decisión que no produce cosa juzgada material, conforme lo exigen los artículos 277 de la Constitución



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

y 53 de la Ley núm. 137-11, conforme han advertido las recurridas y desarrollamos en detalle a continuación.

10.1. El artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11 dispone que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales debe incoarse dentro de un plazo de treinta días, contado a partir de la notificación de la sentencia. Este tribunal ha juzgado que, al tratarse de un plazo suficiente, amplio y garantista, debe interpretarse al tenor del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil: como franco y calendario (TC/0143/15).

10.2. Debido a que *las normas relativas a vencimiento de plazos son normas de orden público, por lo cual su cumplimiento es preceptivo y previo al análisis de cualquier otra causa de inadmisibilidad* (TC/0543/15), podemos comprobar que la sentencia objeto del presente recurso fue notificada íntegramente a los actuales recurrentes el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020), y que el recurso fue interpuesto el dieciocho (18) de septiembre del mismo año vía la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Consecuentemente, se desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo y ante la autoridad que contempla la normativa.

10.3. El referido artículo 54.1 añade, también, que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se interpone mediante un escrito motivado. Esta requerida motivación implica que

*la causal de revisión debe estar desarrollada en el escrito introductorio del recurso, de modo que —a partir de lo esbozado en este— sea posible constatar los supuestos de derecho que —a consideración del recurrente— han sido violentados por el tribunal a-quo al momento de dictar la decisión jurisdiccional recurrida. (TC/0921/18)*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

10.4. Este requisito también se cumple, en vista de que los recurrentes señalan los supuestos agravios de que adolece la decisión atacada, entre otros, falta, ilogicidad y contradicción manifiesta en la motivación, conforme se ha advertido de la lectura del recurso.

10.5. En otro orden, los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11 consagran que la potestad que tiene el Tribunal Constitucional para revisar las decisiones jurisdiccionales se extiende solo para aquellas que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a partir del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Este tribunal ha especificado lo siguiente al respecto:

*Lo anterior implica que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se interpone contra sentencias firmes, que han adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraordinario [...] (TC/0053/13)*

10.6. En ese mismo sentido, este tribunal añadió que esa situación solo se puede evidenciar en dos casos particulares:

*(i) sentencias que resuelven el fondo del asunto presentado por ante la jurisdicción correspondiente; y (ii) sentencias incidentales que, en vista de la decisión tomada, ponen fin definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es competente para conocer el caso[.] (TC/0130/13).*

10.7. Al respecto, este tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse en la Sentencia TC/0153/17 en cuanto a la distinción entre cosa juzgada formal y cosa

Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

juzgada material, juzgando que *para que una decisión pueda ser objeto de un recurso de revisión constitucional decisión jurisdiccional debe tener no solo el carácter de cosa juzgada formal[,] sino también material*. En tal precedente indicamos lo siguiente:

- a. La cosa juzgada formal es el carácter de inimpugnabilidad que en determinado momento adquiere la resolución judicial, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. Formal en el sentido de que la sentencia puede ser objeto de otra sentencia posterior, en otro juicio, que confirme o invalide la anterior.*
- b. La cosa juzgada material es cuando la resolución judicial, además de ser inimpugnable, resulta jurídicamente indiscutible en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Se configura con una sentencia definitivamente firme no susceptible de recurso ordinario o extraordinario, que constituye ley entre las partes en los límites de esa controversia, y es vinculante para todo proceso futuro.*

10.8. Este tribunal constata que, si bien la decisión jurisdiccional objeto del recurso que nos ocupa fue emitida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, esta casó la sentencia de apelación y envió el caso ante la Corte de Apelación de La Vega. Por tanto, el conflicto que envuelve a las partes no ha llegado a su fin, en la medida de que el asunto sigue ventilándose dentro del Poder Judicial. Por ello, estamos frente de una decisión que no ha producido cosa juzgada material, lo que supone una insatisfacción de la exigencia contenida en los artículos 277 de





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11; particularidad que amerita que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional sea inadmitido, conforme han advertido las recurridas.

Por último, los recurrentes han solicitado que la sentencia recurrida sea suspendida. Sobre esto, este tribunal constitucional reitera su precedente de que, al haber inadmitido el recurso de revisión, este pedimento carece de objeto en razón de que está indisolublemente ligado a la suerte del recurso de revisión (TC/0006/15; TC/0034/21). Esta decisión se toma sin necesidad de hacerla constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Domingo Gil y María del Carmen Santana de Cabrera en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

**DECIDE:**

**PRIMERO: INADMITIR**, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta en contra de la Sentencia núm. 0293/2020, emitida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**SEGUNDO: DECLARAR** el procedimiento libre de costas en razón de la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

**TERCERO: COMUNICAR** la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta; y a las recurridas, Rosa Dauhajre Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre Dauhajre.

**CUARTO:** Disponer que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, juez presidente; Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto; Lino Vásquez Samuel, juez segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez; Miguel Valera Montero, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, jueza; Grace A. Ventura Rondón, secretaria.

**VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA**  
**ALBA LUISA BEARD MARCOS**

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y de acuerdo a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, presentamos un voto disidente, fundado en las razones que exponremos a continuación:

Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

1. Conforme los documentos que se encuentran depositados en el expediente, el conflicto se origina con una demanda en cobro de pesos presentada por las ciudadanas Rosa Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre contra los señores Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, que al respecto dictó la sentencia No.0068/2015 de fecha 18 de febrero del año 2015, mediante la cual acogió la referida demanda y condenó a los demandados al pago de la suma de tres millones de pesos (RD\$3,000,000.00) producto de deuda contraída a favor de la parte demandante.
2. Luego, los demandados Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta apelaron la decisión antes citada, por ante la Corte de Apelación de Puerto Plata, que por medio del fallo No.627-2015-00070 de fecha 1 de julio del año 2015, procedió acoger el recurso, revocar la sentencia apelada y rechazar en el fondo la demanda en cobro de pesos por carecer de presupuestos legales y falta de pruebas.
3. En disconformidad con la decisión anterior, los señores Rosa Dauhajre y Rosa Elena Dauhajre incoaron un recurso de casación por ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la que por conducto de la sentencia No.0293/2020 de fecha 26 de febrero del año 2020, decidió lo siguiente: *“CASA la sentencia civil núm. 627-2015-00070 (C), de fecha 1 de julio de 2015, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones.”*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

4. En virtud de lo antes mencionado, los ciudadanos Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta interpusieron un recurso de revisión jurisdiccional, el cual fue declarado inadmisibile por la mayoría calificada de esta sede constitucional por medio de esta sentencia, fundamentado, básicamente, en los siguientes motivos:

*“Lo anterior implica que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se interpone contra sentencias firmes, que han adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraordinario [...] (TC/0053/13). (sic)*

5. Vista las motivaciones esenciales previamente citadas, formulamos esta disidencia respecto a la decisión adoptada, y reiteramos nuestro criterio expresado en votos anteriores, por estar en desacuerdo con el juicio asumido por la cuota mayor de juzgadores del Tribunal Constitucional en el precedente TC/0053/13, aplicado en el presente caso, entre otros más, para declarar inadmisibile el recurso, sosteniendo que el mismo no procede contra sentencias que versan sobre incidentes, pues tenemos el criterio de que, ni el artículo 277, de la Constitución, ni la Ley Núm. 137-11, al consignar que el recurso se interpone contra decisiones definitivas y con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, crea distinción alguna en relación a lo resuelto por el fallo impugnado.

6. En ese orden, el presente voto lo desarrollaremos analizando nuestra posición respecto: a) la interpretación que debe efectuarse del concepto de sentencias con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que prevén los artículos 277 de la Constitución y 53 de la ley 137-11, y b) la naturaleza, regímenes legales, efectos y autonomía de los incidentes.

Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**A. Sobre nuestra posición respecto a la interpretación que debe efectuarse del concepto de sentencias con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que prevén, tanto el artículo 277 de la Constitución, como el artículo 53, de la Ley núm. 137-11.**

7. Como puede apreciarse, este Tribunal Constitucional decidió inadmitir el recurso de revisión de que se trata aplicando el precedente anteriormente citado, bajo el argumento de que la resolución impugnada no resuelve el fondo del proceso, y que el Poder Judicial aún está apoderado.

8. En ese sentido, es necesario analizar las disposiciones de los artículos 277 de la Constitución, y 53 de la Ley 137-11, textos que según la interpretación de la mayoría calificada de este pleno, es el fundamento para la declaratoria de inadmisibilidad de los recursos de revisión interpuestos contra las decisiones que resuelven que a juicio del pleno de este tribunal resuelven los incidentes, aún estas tengan la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, lo cual puede recaer no solo sobre una sentencia que decide el fondo del asunto, como mal interpreta este plenario, sino también, respecto de sentencias que deciden asuntos incidentales, prejuzguen fondo o decidan algún aspecto del proceso.

9. El artículo 277 de la Constitución dispone lo siguiente:

*“Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.”*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

10. Por su lado, el artículo 53, de la Ley 137-11, establece:

*“El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional. 3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos...”*

11. Como se puede apreciar, una interpretación favorable de la norma contenida en los indicados textos refiere a decisiones con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, sin incluir ningún tipo de condición ni hacer distinción a que las sentencia con estas características deben versar sobre el fondo del proceso inicialmente incoado o sobre un incidente que en el curso del mismo haya sido planteado, sino que de manera clara y precisa nos dice que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional podrá interponerse contra *“...todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada...”* de manera que la única condición que mandan dichos artículos es que la decisión sea firme e irrevocable en función de los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del orden jurisdiccional que contra ella se puedan ejercer, sin limitarlo como se ha dicho, a que haya sido proferida sobre el asunto principal o a consecuencia de un incidente planteado en el curso del mismo o como consecuencia de este.





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

12. por ello, es preciso establecer que cuando la ley o la doctrina se refieren a la cosa irrevocablemente juzgada, aluden a la resultante de la labor jurisdiccional agotada, y, por tanto, ese último resultado no es susceptible de ser alcanzado por otro tribunal u órgano del Estado. Eduardo Couture<sup>1</sup> por ejemplo, señala que la cosa juzgada es la "*autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla*". Se habla pues de que tiene una naturaleza heterónoma y por tanto no depende de la voluntad del hombre, sino de una fuerza exterior llamada ley, regla o norma.

13. Por su lado, Adolfo Armando Rivas<sup>2</sup> expresa: "*la cosa juzgada (...) es la virtud jurídica de vigencia del fallo judicial, en la medida y con los alcances fijados por el orden jurídico*". Bien nos indica este autor que "*Para entender adecuadamente el fenómeno de la cosa juzgada, es necesario distinguir entre sus presupuestos, la cosa juzgada en sí como valor ontológico y, por último, las consecuencias de la cosa juzgada*", y en ese sentido, hace el siguiente desarrollo:

*Presupuestos de la cosa juzgada son la existencia de una sentencia firme, es decir, consentida, ejecutoriada o sometida al principio de irrecurribilidad, o bien de sentencia que, aunque no se encuentre consentida y resulte impugnable, produzca efectos equivalentes. A la vez, debe considerarse que la sentencia firme ha de tener un contenido consistente en una declaración de certeza y una expresión de autoridad o mandato. Esta parte ontológica supone, igualmente, un desarrollo procesal previo, ajustado al orden jurídico y en el que se haya respetado el derecho de defensa, desprovisto además de toda nota*

<sup>1</sup> Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera edición póstuma, pág. 401. Roque Depalma Editor.

<sup>2</sup> Revista Verba Iustitiae nRO. 11, P. 61. Revista de la Facultad de Derecho de Moron iD saij: daca010008



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*que pudiera invalidarlo por motivos formales o por vicios de voluntad del juzgador.*

*Consecuencias de la cosa juzgada son: a) tiempo de su subsistencia, vigencia o validez temporal. Es decir, el lapso durante el cual permanecerá con el valor de tal y gozar de los resultantes que juegan como contracara de tal subsistencia. Este tema se vincula con su inmutabilidad; b) posibilidad de cumplimiento. Ello se traduce en la facultad del vencedor de forzar el reconocimiento de lo resuelto por parte de su contrario, de los organismos y personas estatales y/o privadas que puedan tener incidencia en el tema (por ejemplo: registros públicos, deberes de abstención por parte de terceros, etc.), y ante pretensiones de condena, de ejecutar forzosamente lo resuelto... ”.*

14. Por su parte, el Dr. Daniel Olaechea Álvarez Calderón, en su libro Derecho Procesal Civil, al tratar la excepción de cosa juzgada, establece lo siguiente:

*"Se entiende por autoridad de la Cosa Juzgada su eficacia característica que consiste en "la fuerza o eficacia obligatoria inherente a la materia de la decisión judicial contenida en la sentencia. Esta eficacia tiene por objeto proteger en un futuro proceso lo decidido por la sentencia.*

*La Autoridad de la Cosa Juzgada se presenta como una prohibición que excluye o limita el poder reconocido al individuo por el ordenamiento jurídico de acudir a los Órganos Jurisdiccionales, o sea, el derecho de acción. Esta prohibición impone una inacción u omisión, esto es una obligación de no ejercer nuevamente ese derecho con relación a esa situación jurídica concreta solicitando nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales la prestación de su actividad.*



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

*(b) La cosa juzgada, además de imponer a las partes una obligación negativa y de conceder simultáneamente un derecho al Estado, produce como efecto una obligación para el Estado y un derecho para las partes. Los Órganos Jurisdiccionales del Estado tienen así, no sólo la potestad o facultad, sino la obligación de no juzgar una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio anterior entre las mismas partes. Recíprocamente, las partes no sólo tienen la obligación negativa antes mencionada, sino que tienen, además, el derecho de exigir que los Órganos Jurisdiccionales no vuelvan a conocer del asunto que ya ha sido materia de una sentencia definitiva anterior y que ha pasado a la categoría de Cosa Juzgada. De esta forma se ve, pues, que de la Cosa Juzgada surgen derechos y obligaciones subjetivas tanto para las partes como para el Estado".*

15. Como hemos podido apreciar, ninguno de los autores citados - grandes maestros del derecho procesal - distingue sobre qué tipo de sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada, sino que basta que la sentencia que haya decidido el asunto no esté sujeta a recurso alguno dentro del ámbito jurisdiccional, es decir que se hayan agotado todas las vías de impugnación que el legislador hubiere creado contra la misma, para que la esta esté revestida de este carácter de firmeza e inimpugnabilidad.

16. Para el Dr. Daniel Olaechea Álvarez Calderón la eficacia de la sentencia con cosa juzgada, residen en "*...la fuerza o eficacia obligatoria inherente a la materia de la decisión judicial contenida en la sentencia. Esta eficacia tiene por objeto proteger en un futuro proceso lo decidido por la sentencia.*"

17. Ahora bien, esto nos conduce a la siguiente interrogante ¿alcanzan las sentencias que deciden un incidente la autoridad de cosa juzgada al tenor de la



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

regulación normativa vigente en República Dominicana? Evidentemente que sí, veamos:

**B. Naturaleza, regímenes legales, efectos y autonomía de los incidentes.**

18. La Enciclopedia Jurídica actualizada 2020, caracteriza al incidente como *"el planteamiento en el desarrollo del proceso de una cuestión que no pertenece normalmente a lo que hasta entonces ha sido objeto del proceso. La cuestión incidental ha de exigir un tratamiento procesal particular; es decir, ha de ser resuelta por el tribunal previa e independientemente del objeto del proceso dentro del cual se plantea"*.

19. Y es que, como es sabido, los incidentes son mecanismos de defensa acordados por el legislador, sujetos a sus propias reglas y con su propia naturaleza, pues a pesar de que su tramitación se genera dentro de un proceso ya abierto, deben ser decididos con prescindencia del objeto de la causa dentro del cual se generó, de ahí proviene entonces la autonomía que los reviste.

20. Como procesos autónomos que tienen vocación de seguir su propio curso dejan a un lado la cuestión que ha sido objeto del litigio, examinando temas y cuestiones que, aunque se relación con aquel proceso, tienen la virtud de que sin llegar a tocarlos pueden poner fin al mismo de manera definitiva.

21. La autonomía de que gozan los incidentes en un proceso le viene dada por el mismo legislador, al establecer plazos, forma, momento procesal en que deben ser presentados a pena de inadmitirlos e incluso la legislación dominicana instituye las vías recursivas o impugnatorias, así como las formalidades a seguir para tales actuaciones.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

22. Ciertamente, en particulares casos el legislador ha previsto que ciertas sentencias dictadas con ocasión del conocimiento de un incidente solo podrán ser recurridas con el fondo del asunto, sin embargo, esas son excepcionales y son aquellas más bien de carácter preparatorio. No obstante, aquellas sentencias que aun versando sobre un incidente recorren todos los grados abiertos dentro del ordenamiento jurídico, indefectiblemente deja atrás aquel objeto de la demanda dentro del cual se planteó y sigue su propio curso por ante el poder jurisdiccional creado en el Estado a esos fines. Por ende, al ser procesos independientes del objeto dentro del cual se originaron, cuentan con sus propias reglas procesales (plazos y formalidades impugnatorias) y la sentencia dimanada indudablemente alcanza la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada exigida por los artículos 277 de la Constitución y 53 de la ley 137-11. Pues resulta claro que ya ese mismo incidente no podrá plantearse nueva vez en ninguna de las etapas que puedan estar pendiente sobre el asunto principal.

23. Cerrarle las puertas al recurso de revisión constitucional a una sentencia que se encuentra revestida de la autoridad de la cosa juzgada por el mero hecho de decidir una cuestión incidental se traduce en una arbitrariedad de este órgano especializado de justicia sustantiva, dando la espalda a lo que la Constitución y la ley le ordenan sin base ni fundamento legal o iusfundamental, pues como hemos expresado, en razón de la autonomía procesal de los incidentes, estos cuentan con reglas, régimen y vida jurisdiccional propia, por lo que resulta evidente que - en la valoración de estos - cualquiera de las instancias, incluyendo la Corte de Casación, puede incurrir en una violación grosera al debido proceso, a las garantías procesales o a derechos fundamentales de los involucrados. Sin embargo, con la postura doctrinal adoptada es evidente que tales cuestiones están dejando de ser garantizadas por el órgano supremo encargado de esa misión, que es el Tribunal Constitucional.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

24. A mi modo de ver, se trata de una interpretación restrictiva, que contraria el carácter abierto de la Constitución 2010, y es que por el contrario, la norma constitucional debe ser interpretada en el marco de los principios informantes del derecho procesal constitucional dominicano, precisamente por su carácter abierto y garantista, y por ello, aquellas cuestiones que pudieran parecer restrictivas o cerradas se deben interpretar a favor del titular del derecho reclamado, en función del principio *indubio pro homine*, y del principio de favorabilidad, que se desprenden del artículo 74 de la Constitución, y consagrado entre los principios rectores de nuestra normativa procesal constitucional, específicamente en el numeral 5) del artículo 7 de la ley 137-11.

25. Respecto al principio *indubio pro homine*, este plenario en su sentencia núm. TC/0247/18, concretizó que “*el principio pro actione o favor actionis—concreción procesal del principio indubio pro homine estatuido en el artículo 74.4 de la Constitución—supone que, ante dudas fundadas sobre la observancia por parte del recurrente de un requisito objetivo de admisibilidad en particular, el Tribunal Constitucional debe presumir la sujeción del recurrente a dicho requisito para garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales.*”

26. En este mismo sentido, el principio de favorabilidad ha sido igualmente tratado por este Tribunal en la sentencia núm. TC 0323/17, sosteniendo esta corporación que este principio “*...se expresa en el sentido de que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad, para favorecer al titular del derecho; es decir, ninguna ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.*”

27. Visto todo lo anterior es indudable que cerrar el camino a un recurrente que ante este órgano constitucional denuncia - a través de un recurso de revisión





**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

de decisión jurisdiccional contra una sentencia definitiva y con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, aunque esta sea el resultado de un incidente planteado en los órganos judiciales ordinarios- la violación de un derecho fundamental, bajo el argumento de que el asunto principal no ha sido decidido, aparte de una arbitrariedad manifiesta, constituye un acto de trasgresión del artículo 184 de la Constitución que de manera clara establece que habrá un Tribunal Constitucional “...para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.”

28. Y es que, en materia de garantía de derechos fundamentales no deben colocarse trabas limitantes ni condiciones que impidan al juzgador garantizar su reposición y en su caso, ordenar su protección o prevenir su violación, máxime cuando nos referimos al órgano de cierre de los asuntos constitucionales dentro del Estado, pues es justamente este órgano el llamado constitucionalmente a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, a velar por el debido proceso y las garantías procesales que deben resguardar todos los tribunales de la república, cuestiones estas que solo puede cumplirse a cabalidad en el marco de la revisión de decisiones jurisdiccionales.

29. De igual manera, entendemos que mediante esta decisión se violenta el principio de unidad de la Constitución, el cual presupone una correlación recíproca e integral de todo el contenido sustantivo, incluyendo las normas del debido proceso y de competencia, principio que debe orientar a este órgano a hacer una interpretación armónica y concordante de la Constitución y sus fines, encontrándose la dignidad humana como factor esencial de estos valores y principios fundantes que constituyen la base de nuestro armazón constitucional en aras de garantizar la cohesión social.



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

30. Por tanto, ante una queja de violación a un derecho fundamental invocada en un recurso de revisión, ya sea atribuida a una sentencia que decide un incidente o sobre una sentencia que decide el objeto principal en el cual se generó el incidente, este Tribunal Constitucional no debe detenerse a obstaculizar creando condiciones no previstas por el constituyente ni por el legislador orgánico, pues con ello violenta el debido proceso así como los principios y valores que fundan la Constitución consagrados en el preámbulo de la misma, e incurre, como hemos dicho en un acto arbitrario, es decir fuera de todo fundamento normativo.

31. En el mismo sentido, además, esta juzgadora estima que en casos de la naturaleza que nos ocupa entra en juego también el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual correlativamente es una obligación del juzgador, pues en la medida que para el individuo la tutela judicial efectiva es un derecho, es una obligación para el juez garantizarla, lo cual cobra mayor trascendencia cuando se trata de la jurisdicción constitucional, como último mecanismo existente en el ordenamiento jurídico dominicano y el carácter definitivo y vinculante de sus decisiones.

32. Y es que, todas las garantías constitucionales deben interpretarse en el sentido más favorable al justiciable, y la misma igualmente se proyecta impidiendo que el juzgador creé restricciones que el legislador no instauró, por el contrario, la propia Constitución de la Republica obliga al Estado y todos sus órganos a estructurar y mantener la disponibilidad para el ciudadano, de mecanismos legales y garantistas de protección jurídica de sus derechos e intereses legítimos, que impliquen no solo instrumentos procesales para la invocación de estos derechos, sino, que una vez rendida una determinada decisión, y que la misma tenga autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, esta pueda ser examinada ante el Tribunal Constitucional, sin limitarse a que se haya



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

conocido el fondo u objeto de un determinado asunto, sino que sea suficiente con que no existan más recursos ante el Poder Judicial, independientemente de si la sentencia con esos efectos es producto de un incidente en el proceso.

33. Lo anterior demuestra lo erróneo de la decisión adoptada por la mayoría calificada de este plenario, que afirmó “[...] *que, si bien la decisión jurisdiccional objeto del recurso que nos ocupa fue emitida el 26 de febrero de 2020 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, esta casó la sentencia de apelación y envió el caso ante la Corte de Apelación de La Vega. Por tanto, el conflicto que envuelve a las partes no ha llegado a su fin, en la medida de que el asunto sigue ventilándose dentro del Poder Judicial. [...].*” (sic)

Frente a estas aseveraciones, esta juzgadora se pregunta y cuestiona, ¿la sentencia que fue objeto del recurso de revisión tiene autoridad de cosa juzgada? Hay que convenir indefectiblemente en que sí la tiene. ¿Se agotaron los instrumentos procesales impugnatorios correspondientes al proceso incidental? Sí, se agotaron, pues la sentencia atacada proviene de la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal en el orden jurisdiccional ordinario del Estado dominicano.

¿En el curso de un proceso que versa sobre un incidente, pueden los juzgadores incurrir en los mismos vicios, que en el curso de un proceso cuyo objeto es otro? La respuesta positiva salta a la vista, pues pueden los juzgadores a través de una sentencia sobre incidente incurrir en los mismos vicios o lesión a derechos fundamentales.

34. En virtud de lo que hemos esbozado previamente, estimamos que este Tribunal Constitucional no debió aplicar el precedente sobre el cual formulamos



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

el presente voto y en cambio debió abocarse a conocer el fondo del recurso y verificar si ciertamente en la especie se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

35. Como demostramos previamente, la proposición normativa contenida en el artículo 53 de la Ley 137-11, debe ser interpretada de la forma más favorable, y en el proceso intelectual de su interpretación debe propenderse a dotar de eficacia jurídica a la norma que hace alusión a que esta sede *“tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”*, y cuya condición de admisibilidad es que *“...la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución” u ordenanza [...] viole un precedente del Tribunal Constitucional [...] haya producido una violación de un derecho fundamental*”, sin importar que el fallo conozca y decida en torno a un incidente, medio de inadmisión o sea en torno a una sentencia interlocutoria.

36. El texto constitucional – art. 277 – y la disposición legal – art. 53 de la Ley 137-11 – que rigen la materia no hacen distinción respecto a la naturaleza de la decisión cuya revisión se pretende, más aún, hemos demostrado como la doctrina procesal universal reconoce el carácter autónomo y soberano de las sentencias que conocen y deciden de los incidentes, respecto a las sentencias de fondo, ante lo cual las mismas alcanzan y se revisten de su propia autoridad de cosa juzgada, lo que las convierte en pasibles de ser revisadas por el instrumento de garantía y protección de los derechos fundamentales para las decisiones judiciales concebidos por el constituyente y el legislador ordinario.

37. En el caso particular, pudimos comprobar que lo planteado por la parte recurrente constituye un medio de defensa que debió ser ponderado, por lo menos respecto de los derechos que intentaba proteger. Sin embargo, sin tomar en cuenta el principio *in dubio pro legislatore* y las garantías procesales, el

Expedientes núms. TC-04-2023-0079 y TC-07-2023-0019, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por los Sres. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, contra la Sentencia núm. 0293/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Tribunal Constitucional decidió declarar inadmisible el recurso de revisión constitucional de la especie, sobre la base de que la sentencia recurrida versaba sobre una cuestión incidental y que el Poder Judicial no se ha desapoderado del litigio, argumento con el que no estoy de acuerdo, pues obviaron que el tema que decide la sentencia impugnada ante esta alta corte, si tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada pues el mismo no podrá volver a plantearse a pesar de que el proceso principal aun esta pendiente en los tribunales ordinarios.

**Conclusión:**

En el caso de la especie, consideramos que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales debió ser conocido y ponderado en cuanto al fondo, y no decretarse su inadmisibilidad bajo el argumento de que se trata de una sentencia incidental que no pone fin al proceso, como lo hemos desarrollado en el cuerpo de este voto.

Tal decisión, bajo ese argumento, lesiona el principio de favorabilidad, la dignidad humana, la tutela judicial efectiva y debido proceso, en tanto se podría estar cerrando la única posibilidad a la parte recurrente de que sea subsanada una vulneración a algún derecho fundamental que se haya suscitado en una determinada etapa procesal.

En otras palabras, a nuestro juicio, la autoridad de cosa juzgada que prevé la normativa procesal constitucional recae, tanto sobre una decisión respecto al fondo de un asunto, como respecto a un asunto incidental, toda vez que, ni el artículo 277, de la Constitución, ni el artículo 53, de la Ley 137-11, hacen distinción alguna, y por vía de consecuencia, la distinción que hace la posición mayoritaria de este pleno entra en contradicción con los artículos 184 y 74 de la ley sustantiva, pues, como hemos sostenido en votos anteriores, es una



**República Dominicana**  
**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

interpretación que en vez de favorecer, perjudica al justiciable en sus derechos fundamentales.

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, jueza

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados.

**Grace A. Ventura Rondón**  
**Secretaria**